

Rancagua, treinta de agosto de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Con fecha once de julio del presente año, ante la Segunda Sala de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, se realizó la audiencia pública para conocer del recurso de nulidad interpuesto por el abogado Carlo Solís Quezada, en representación del Servicio de la Vivienda y Urbanismo (en adelante, Serviu) y del arbitrio presentado por el letrado Juan Pablo Arenas Catalán, en representación de la Ilustre Municipalidad de Codegua, ambos deducidos en contra de la sentencia definitiva dictada con fecha 5 de diciembre de 2023, rectificada con fecha 18 de enero de 2024, en la causa RIT 651-2021 del Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, la cual acogió la demanda promovida por el actor Manuel Jesús Padilla Osses, en contra de su ex -empleador “Construcciones y Multiservicios Pasyva Ltda”; en contra de la Ilustre Municipalidad de Codegua y el SERVIU de esta región, declarando que su despido era injustificado y nulo, y además condenó a pagar a los demandados, de forma solidaria, a las siguientes prestaciones, a saber:

1º) \$592.959.- por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo.

2º) \$1.778.877.- por concepto de indemnización por años de servicio por el equivalente a 3 años de servicios (2 años y fracción superior a 6 meses).

3º) \$889.439.-por concepto de recargo legal establecido en el artículo 168 letra b) del Código del Trabajo, equivalente al 50% por sobre la indemnización por años de servicios.

4º) \$480.000.- por concepto de remuneraciones líquidas por el mes de julio del año 2021.

5º) \$80.0000.- por concepto de remuneraciones líquidas, por 5 días del mes de agosto del año 2021.



6º) \$415.071.- por concepto de compensación de feriado legal, por el período comprendido entre el 18 de octubre del año 2018 al 17 de octubre del año 2019, por el equivalente a 21 días corridos.

7º) \$415.071.- por concepto de compensación por concepto de feriado legal, por el período comprendido entre el 18 de octubre del año 2019 al 17 de octubre del año 2020, por el equivalente a 21 días corridos.

8º) \$331.859.- por concepto de compensación por concepto de feriado proporcional por el período comprendido entre el 18 de octubre del año 2020 y el 5 de agosto del año 2021, por el equivalente a 16.79 días corridos.

9º) Cotizaciones previsionales y de salud a las que se encuentra afiliado, esto es AFP PROVIDA, FONASA y AFC, por los meses de junio, julio y 5 días del mes de agosto del año 2021, en base a una remuneración imponible de \$592.959.

10º) Diferencias por concepto de pago de cotizaciones previsionales y de salud, conforme al detalle del recuadro incluido en la referida sentencia en base a una remuneración imponible de \$592.959.

Además, declaró que el despido de que fue objeto el actor, con fecha 05 de agosto de 2021, es nulo para efectos remuneracionales, motivo por el cual se le adeudan al actor las remuneraciones, incluidas las cotizaciones de seguridad social, desde la fecha de su despido hasta su convalidación, de conformidad a la ley, en base a una remuneración mensual ascendente a la suma \$592.959.

La sentencia dispone que las sumas ordenadas pagar deberán serlo con los reajustes e intereses contemplados en los artículos 63 o 173 del Código del Trabajo, según corresponda y no condena en costas a las demandadas, primero por no haberse opuesto formalmente a la demanda en el caso de Construcciones y



Multiservicios Pasyva Ltda. y en el caso de Ilustre Municipalidad de Codegua y Serviu de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, por considerarse que tuvieron motivo plausible para litigar.

Pues bien, declarados admisibles los referidos recursos de nulidad vigentes, puesto que, en el caso del arbitrio de invalidación de la Defensoría Laboral, ésta no perseveró, conforme consta en el folio 140 de primera instancia, se procedió a la vista de la causa, oportunidad en que comparecieron la Defensoría Laboral de Rancagua, la Ilustre Municipalidad de Codegua, y el Servicio de la Vivienda y Urbanismo, quedando la causa en estudio y luego con fecha 20 de agosto de 2024, en acuerdo, procediéndose a dictar el siguiente fallo.

Considerando:

1º) Que, el abogado Juan Pablo Arenas, por la parte demandada solidaria y subsidiaria, Ilustre Municipalidad de Codegua, planteó como causal principal de nulidad aquella prevista en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, esto es, cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior, y sus fundamentos los extrajo primeramente del considerando décimo tercero al señalar que: *“En consecuencia, la Ilustre Municipalidad de Codegua, quien es dueña del terreno en que se emplazan los proyectos habitacionales y el SERVIU son dueños de la obra y, en el caso de Serviu, es quien la supervisa, controla y en parte administra su financiamiento. Por tanto, se cumplen los requisitos del artículo 183-A del Código del Trabajo para establecer la existencia de un régimen de subcontratación, por lo que la demanda debe ser acogida a sus respectivos. Al haber deuda previsional, es evidente que las demandadas solidarias/subsidiarias no ha ejercido el derecho de retención en forma, siguiendo al artículo 183- B y siguientes del Código del Trabajo, por lo que corresponde que responda solidariamente de las obligaciones declaradas en esta sentencia”*.



Según el arbitrio se afirma la responsabilidad atribuida a la Municipalidad en su calidad de dueña del terreno en los términos del artículo 183-A del Código del Trabajo, no obstante que, a lo largo de la sentencia recurrida, se le denomina al Serviú de la Región de O'Higgins como “supervisor, controlador y administrador del financiamiento” del Proyecto Habitacional, empero solo se justifica la solidaridad atribuida a la Municipalidad de Codegua, por su calidad de dueño de la propiedad, en virtud de los registros conservatorios que se señalan en el considerando décimo tercero de la sentencia. Admite eso sí, que la única responsabilidad posible podría ser la subsidiaria, y en ningún caso la solidaria, toda vez que la entidad encargada de la entrega de los fondos, administrarlos, desarrollar labores de supervisión y control de las obras era el Serviú.

El recurrente sostiene que los acuerdos se generaron entre “La Secretaria Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins” y “La Municipalidad de Codegua” a través de un Convenio Regional de Asistencia Técnica para Programas Habitacionales, otro entre la Municipalidad de Codegua y el Comité Habitacional Villa San José o el “Grupo” a través de una carta de compromiso de Prestación de Asistencia Técnica y Social y, finalmente, uno entre estos dos últimos y la Constructora. Por tanto, como es posible apreciar, dichos acuerdos evidentemente escaparon al régimen de subcontratación, de modo que existe un único obligado al pago de indemnizaciones y prestaciones laborales que es Construcciones y Multiservicios Pasyva Ltda, sin perjuicio de la solidaridad que recae en el SERVIU.

Reafirma sus argumentaciones al sostener que el contrato de construcción de proyectos habitacionales en su cláusula vigésima tercera establecía expresamente que: *“será de cargo exclusivo del contratista cualquier pago, multa o sanción pecuniaria, o indemnización de cualquier especie que este deba pagar por causa o como consecuencia de omisión o incumplimiento de las obligaciones*



laborales, previsionales y de las demás que se deriven de su calidad de empleador de sus trabajadores o de los subcontratistas. En caso de que la Entidad, o el Grupo, o ambos se vieran obligados a cualquier desembolso por tales conceptos, queda expresamente establecido que tendrán derecho a reembolsarse de las cantidades que corresponda, deduciéndola de las sumas que se deban pagar al Contratista, de las retenciones o garantías que obren en poder del SERVIU, y también podrán ser deducidas de cualquier suma que la Entidad, el Grupo o el SERVIU adeude al Contratista, se deriven o no del presente contrato.” Es decir, para el recurrente lo que primero era posible inferir es que era de cargo exclusivo de Construcciones y Multiservicios Pasyva Ltda., cualquier pago, multa o sanción pecuniaria, o indemnización de cualquier especie que este deba pagar por causa o como consecuencia de omisión o incumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales y de las demás que se deriven de su calidad de empleador de sus trabajadores; en segundo término, que existía un régimen de subordinación y dependencia al amparo del Código del Trabajo, entre Construcciones y Multiservicios Pasyva Ltda y Sr. Padilla Osses; y en tercer lugar, que a la Entidad Patrocinante Municipal solo le correspondía dar la asesoría técnica para los programas habitacionales, mientras que es el SERVIU era quien administraba los recursos y era dueña de la obra, como claramente quedó establecido no solo contractualmente sino a lo largo de la sentencia recurrida y específicamente en el considerando décimo tercero.

Solicita que se acoja la causal de nulidad impetrada, se invalide la sentencia y se dicte una sentencia de reemplazo, la que deje sin efecto la responsabilidad solidaria atribuida a la Municipalidad de Codegua, y en el caso de no ser acogida esta solicitud, la sentencia recurrida sea modificada en el sentido de indicar que la responsabilidad de la entidad edilicia es subsidiaria.



2º) Que, abordando derechamente esta causal se trata de una que asienta su procedencia en la necesidad de alterar la calificación jurídica de los hechos, sin necesidad de modificar las conclusiones fácticas, y en lo pertinente lo que se busca es objetar la conclusión del tribunal que afirma la responsabilidad solidaria de la Ilustre Municipalidad de Codegua.

En definitiva, lo que se ha de resolver es si para el caso de la entidad edilicia nos encontramos frente a un régimen de subcontratación, el que se rige por lo establecido en el artículo 183 literal a) del Código del Trabajo, que en su inciso primero dispone: *“Es trabajo en régimen de subcontratación, aquél realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas. Con todo, no quedarán sujetos a las normas de este Párrafo las obras o los servicios que se ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica”*.

Y su inciso segundo agrega: *“Si los servicios prestados se realizan sin sujeción a Art. 3º los requisitos señalados en el inciso anterior o se limitan sólo a la intermediación de trabajadores a una faena, se entenderá que el empleador es el dueño de la obra, empresa o faena, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por aplicación del artículo 506”*.

Ahora bien, para el recurrente la responsabilidad de la Municipalidad estriba en la calidad de dueña del terreno de ésta, empero omite que la sentenciadora no solo afirma su conclusión en tal realidad, sino que lo expresa en el motivo décimo tercero cuando explicita el catálogo de instrumentos contractuales que ligan a la Municipalidad como mandante de las empresas constructoras que



acometieron el proyecto de construcción de viviendas sociales-primigeniamente Bauen- y luego Construcciones y Multiservicios Pasyva Ltda, que si bien efectivamente estaban asentadas en terrenos de propiedad de la entidad edilicia, se dio bajo el régimen del el D.S. N°49 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 2011, que versaba sobre el programa del subsidio llamado “Fondo Solidario de elección de vivienda”, que incluía la municipalidad de Codegua como mandante patrocinante para el cometido encargado a sus mandatarios. En efecto, resulta clarificador el documento celebrado el 31 de mayo de 2016, denominado “Contrato de Construcción de Proyectos Habitacionales”, que se celebra entre el “Comité Habitacional Villa San José” además de “EGIS I Municipalidad de Codegua” con “Constructora Bauen Graneros Limitada”, en donde en su cláusula primera establece que la entidad patrocinante (Egis Municipalidad de Codegua) dentro de los Servicios de Asistencia Técnica y Social que se encuentra prestando al Grupo, se compromete a presentar el proyecto habitacional al Serviu con el objeto de que los miembros del Grupo resulten beneficiados con el subsidio habitacional establecido en el DS N° 49 del año 2012 y sus modificaciones (DS 105) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que regula el programa de Fondo Solidario de elección de vivienda.

Sin embargo, la cláusula más clarificadora y que asienta la existencia del régimen de subcontratación es la tercera, cuando expresa que tanto el Grupo (o sea, el Comité Habitacional Villa San José) y la Entidad Patrocinante (EGIS I Municipalidad de Codegua) **encargan** al CONTRATISTA, quien acepta ejecutar la construcción de 141 viviendas, equipamiento de áreas verdes, obras complementarias derivadas de subsidio y la urbanización en que emplazarán las viviendas.

Lo mismo en términos generales se puede leer de otro Contrato de Construcción de Proyectos Habitacionales de 31 de mayo de 2016, “Comité Habitacional Villa San José” “Egis I. Municipalidad de



Codegua” y “Constructora Bauen Graneros Limitada” con relación a un proyecto por 71 viviendas tanto el Grupo (o sea, el Comité Habitacional Villa San José) y la Entidad Patrocinante (EGIS I Municipalidad de Codegua) quienes **encargan** al CONTRATISTA la construcción quien acepta ejecutar la construcción de esas 71 viviendas.

Entonces, el trabajo el actor lo realizó para el empleador que fueron las empresas constructoras y ellos (los contratistas) celebraron un acuerdo contractual con quienes les encargaron ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo, con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica como lo fue la Municipalidad de Codegua, en lo que aquí se trata, lo que hace aplicable el régimen de subcontratación como bien lo decidió el tribunal a quo.

En conclusión, no resulta necesario como lo planteó el recurrente, en esta causal principal, enmendar la calificación jurídica a la que arribó el tribunal, porque bien realizada está, por lo que solo cabe en esta parte rechazar la invalidación sustentada en el artículo 478, letra c) del Código del Trabajo.

3º) Que, en subsidio de lo antes planteado Municipalidad de Codegua invocó como causal de nulidad, aquella prevista en el artículo 477, inciso final del Código del Trabajo, en cuanto sostuvo que en los considerandos décimo tercero, décimo cuarto y décimo séptimo de la sentencia, se consolidó la existencia de una abierta infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, desde el momento en que la sentencia denomina empresa principal en régimen de subcontratación tanto a la Municipalidad de Codegua como a SERVIU, para enseguida solo señalar como empresa principal a SERVIU, al sostener que los bienes y las obras son de su propiedad conforme al artículo 64 del D.S. 355 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 1976.



En esta órbita de supuesta errónea aplicación del derecho debemos relevar que, al encontrarnos en sede de invalidación y en campo de un recurso de nulidad de derecho estricto, es de necesidad perentoria que el arbitrio precise cual es la norma que estima mal aplicada o interpretada. Es decir, el recurso debe ajustarse cabalmente a la normativa que lo regula, por lo que su procedencia estará siempre limitada, en primer término, por la naturaleza de las resoluciones impugnadas; en segundo lugar, por las causales expresamente establecidas en la ley y, finalmente, por las formalidades que debe cumplir el escrito pertinente en cuanto al modo en que se interponen las respectivas causales.

Así pues, en esta parte, el motivo de nulidad alegado corresponde al error denominado "*in iudicando*", es decir, el yerro jurídico cuyo marco se traduce en las opciones de aplicación errónea de la ley, infracción de la ley o bien aplicación errónea del Derecho. Sobre ello, la doctrina ha expuesto que hay tres maneras de infringir la norma jurídica, cuales son la violación, la aplicación errónea o falsa aplicación, y la interpretación indebida, pero en el caso *sub-lite* el problema es que el arbitrio si bien releva y cuestiona una conclusión a la que arriba el tribunal- de la que parece disentir- no expresa cual es la norma sobre la base que se produce la violación de norma, lo que es un obstáculo insalvable para esta Corte que le impide realizar el examen que la parte reclama para dilucidar si existe o no el mentado yerro que el recurrente releva. Por ello, solo cabe desestimar el recurso por esta causal relativo a este acápite.

4º) Que, el recurrente Municipalidad de Codegua objeta por esta misma causal de errónea aplicación del derecho que se haya declarado que el despido era injustificado y nulo, en específico, porque la sanción de nulidad del despido, corresponde a una materia unificada que la hace improcedente respecto a la administración del Estado, en tanto, no le resulta aplicable concretamente a la I. Municipalidad de Codegua, como lo expresa la causa Rol N°12.294-2022, de la



Excelentísima Corte Suprema al referir- en lo esencial- que la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, en el caso de los órganos del Estado, y por lo mismo cabe considerar infraccionado el artículo 162 del Código del Trabajo.

Sobre el punto, es menester relevar que el recurrente hace confundir la situación ocurrida en autos con aquella que se invoca a título de unificación por las siguientes razones. En efecto, el mentado fallo Rol N°12.294-2022, de la Excelentísima Corte Suprema sostiene en lo pertinente que, declarada la existencia de una relación laboral entre un particular y un órgano de la administración del Estado, resulta improcedente dar aplicación de la sanción de nulidad de despido, pero lo hace sustentado en que la relación jurídica se basó en contrataciones a honorarios celebradas al amparo de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 18.883, estatuto legal que les confiere una presunción de legalidad, desnaturalizándose la finalidad del instituto de la nulidad de despido, al verse impedida, como órgano público, de la posibilidad de convalidación. Entonces, lo resuelto por nuestro máximo tribunal está referido a la celebración de contratos a honorarios con órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, y es eso, lo que autoriza a diferenciar la aplicación de la punición de la nulidad del despido, esto es, que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgó una presunción de legalidad, lo que ha permitido entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la sanción de nulidad del despido.

Pues bien, dicho lo anterior, la situación de la Municipalidad de Codegua es una diametralmente distinta, pues, como se ha dicho, en el caso *sub-lite* no se encuentra discutida la existencia de la relación jurídica de carácter laboral del trabajador con su empleador, y por ende, la misma situación es la aplicable para la Municipalidad de Codegua, por haberse comprobado a su respecto la existencia del régimen de sub- contratación que le empece y que la obliga



solidariamente, siendo así, plenamente aplicables las obligaciones que emanan del artículo 183 B) del Código del Trabajo a su respecto, y lo dispuesto en el artículo 183 C) del código precitado. Es por lo anterior, que para su caso no cabe aceptar argumentativamente que la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo se desnaturalice, por cuanto su responsabilidad fluye de una relación laboral existente y no cuestionada, celebrada entre un trabajador y el contratista, misma de la que fluye la responsabilidad de la Municipalidad de carácter solidaria, en donde no se ha puesto cuestión al tipo de relación ni a su naturaleza como es en el caso en que se fundamente la jurisprudencia que el recurrente alega a su favor, olvidando que el caso de autos es diferente y por lo mismo no cabe hacer un extrapolación a una hipótesis diferente, y entonces no existe error de derecho alguno en este punto por parte de la sentenciadora por lo que el arbitrio en este acápite debe rechazarse.

5º) Que, finalmente el abogado del demandado Serviu interpuso recurso de nulidad de la sentencia la contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, el caso de aquélla (sentencia) que se hubiere dictado con infracción de ley, que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Fundó su arbitrio al sostener que el Tribunal en el considerando décimo tercero y siguientes del fallo, infringió lo dispuesto en el artículo 183 a) del Código del Trabajo, al determinarse por el sentenciador que SERVIU era solidariamente responsable del pago de las obligaciones laborales y previsionales del ex trabajador de la empresa Pasyva.

El recurrente sostiene que el tribunal tiene por establecido, que el ex - trabajador de la empresa Pasyva, prestó servicios bajo el alero del D.S. N° 49 de Fondo de Elección de Vivienda, del año 2011. Para este fin, el artículo 52 dispone la intervención de las denominadas “Entidades Patrocinantes” que tienen la misión de desarrollar los proyectos habitacionales y que son las que contratan las obras y las supervisan (artículo 53 DS 59 de 2011 del Minvu). En dicho contrato



de construcción se aprecia que el SERVIU ejerce el rol propio de un dueño de obra y empresa principal. Controla la viabilidad técnica y administrativa (cláusula primera, segunda, sexta) ejecuta y controla los pagos (cláusula novena y décima), se establecen facultades ante incumplimiento (cláusula décimo cuarta, vigésimo octava), pide garantías para caucionar incluso obligaciones laborales (cláusula décimo sexta), controla el cumplimiento de obligación de protección de la salud, seguridad e higiene en el trabajo y laborales en general (cláusula décimo octava, literales t y u), ejerce derechos de información y retención del artículo 183- C del Código del Trabajo (cláusula vigésimo cuarta) y, finalmente, se considera que estos bienes y las obras son de su propiedad en conformidad esto último al artículo 64 del D.S. 355 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 1976. Este último elemento es muy relevante porque corresponde a una norma jurídica que establece la propiedad de SERVIU sobre la obra en que trabajó el demandante.

El recurrente a la luz de lo anterior sostiene que SERVIU es un órgano de la Administración del Estado, y en tal sentido adquiere plena aplicación lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 19.886 sobre “contratos administrativos” el que establece que *TODOS los contratos que celebre la administración del Estado, a título oneroso, (...) se ajustarán a las normas y principios del presente cuerpo legal y de su reglamentación.* A mayor abundamiento, y más específicamente, el D.S. N° 236 regula y forma parte integrante de todos los contratos de construcción de obras que celebren los Servicios de Vivienda y Urbanización (art. 1º). Entonces, el recurrente sostiene que, sin perjuicio que la sentencia reconoce que Serviu no suscribe el contrato de construcción respecto del cual el demandante prestó servicios para la empresa comprometida a esa construcción, igualmente decide condenar a SERVIU, no obstante texto expreso que obliga al SERVIU a contratar conforme a las normas que perentoriamente regulan este tipo de contrataciones.



Sostiene que en estos autos no existe ningún antecedente, ni siquiera un indicio que pudiera dar por acreditado el presupuesto esencial del art. 183 – A del Código del Trabajo, vale decir, un acuerdo contractual entre este SERVIU condenado y el ex empleador del demandante y con ello decaen los presupuestos de cualquier subcontratación que vincule al Serviú con el actor bajo la responsabilidad que ha sido condenado.

En conclusión, el arbitrio solicita que se acoja la causal de nulidad impetrada, y en su lugar se dicte una sentencia de reemplazo, dando una correcta aplicación del artículo 183 A del Código del Trabajo la que exima SERVIU de cualquier responsabilidad en régimen de subcontratación, por no empecerle.

6º) Que, respecto de este capítulo de invalidación, sobre infracción de ley, es el artículo 183 A del Código del Trabajo, el que se estima mal interpretado y aplicado a una hipótesis que no corresponde puesto que no se dan los requisitos de la subcontratación.

Así las cosas, el artículo 183 A del Código del Trabajo establece que: “Es trabajo en régimen de subcontratación, aquél realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, **en razón de un acuerdo contractual**, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas” (lo resaltado es nuestro). Pues bien, este requisito basal de la subcontratación, en que aparezca suscribiendo un contrato el Serviú contratando la ejecución de las obras no se encuentra en ningún antecedente de la causa y por el contrario, como ya se ha analizado en el presente arbitrio en motivos precedentes, en los instrumentos contractuales intervienen un conjunto de personas reunidas en una persona jurídica denominada Comité de Viviendas; una empresa constructora, que será diferente según la época del



contrato y una Entidad Patrocinante, que ya sabemos es la Ilustre Municipalidad de Codegua, excluyéndose al Serviu, siendo la Entidad Patrocinante, la dueña del terreno, pero también la que elabora el diseño y prepara proyectos, y lo que resulta más relevante, es **quien contrata las obras**.

7º) Que, por otro lado, es cierto que las partes contratantes entregan una labor de supervisión al Serviu sobre todo en referencia a la inspección técnica de la obra, y en específico el contratista para cumplir con los requerimientos e instrucciones de éste, **“necesarias para la completa y correcta ejecución del proyecto habitacional con la calidad y estándares técnicos establecidos en el proyecto y para la total y oportuna aplicación de los subsidios otorgados por el MINVU”** (Véase letra w, cláusula décimo octava contrato de Construcción de Proyectos Habitacionales), pero dicha actividad dice relación con el cumplimiento de lo necesario para el otorgamiento de los subsidios respectivos, pero en ningún caso lo hace parte de un régimen de sub -contratación que lleve a afirmar su responsabilidad en el presente caso, como la sentencia lo determina.

8º) Que, además, es cierto lo que releva el arbitrio de nulidad en cuanto a que la cláusula vigésima del contrato de construcción, tantas veces citado, establece que el contratista podrá subcontratar parte de las obras que se le han encomendado, previa autorización de la Entidad (I. Municipalidad de Codegua), lo que le otorga prerrogativas que no posee el Serviu, a lo que se debe sumar que la corporación edilicia, es dueña del terreno en que se ejecutan las obras, está habilitada para contratar y encargó la ejecución de las obras a otros (contratistas), todas actuaciones que lejos están de la esfera de competencia del Serviu, estando solo aquellas que dicen relación con el control y fiscalización de estándares de calidad en la construcción de las viviendas, lo que tiene que ver con la entrega de recursos como subsidios para los pobladores y que impacta con el control del buen uso de recursos públicos, pero no con que ello importe adscribir a un



régimen de subcontratación y el deber de responder frente a trabajadores que no poseen ni siquiera un vínculo indirecto con ella, como sí ocurre en el caso de la Municipalidad de Codegua.

9º) Que, por último, cuando la sentenciadora, al amparo del Decreto N°355, que aprueba el Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización, en su artículo 64º concluye que, las obras que se levanten, como también los demás muebles destinados a incorporarse a tales obras, se considerarán de propiedad y bajo la posesión del SERVIU, con lo que olvida el texto completo de la referida disposición, obteniendo una conclusión equivocada. En efecto, el artículo en comento señala: *“Son absolutamente inembargables y no susceptibles de medida precautoria alguna todos los bienes, fondos, derechos y acciones de cualquier naturaleza que sean, que formen parte del SERVIU. Esta inembargabilidad comprende, asimismo, toda obra o construcción ejecutada con fondos del Servicio y los terrenos en que tales obras se levanten, como también los demás muebles destinados a incorporarse a tales obras, que, para estos efectos, se considerarán de propiedad y bajo la posesión del SERVIU, aún en el caso de no existir recepción provisional de las obras”*; es decir, no se puede extrapolar que el privilegio de inembargabilidad a toda obra o construcción ejecutada con fondos del SERVIU, importe entender que toda obra o construcción pueda adherir al patrimonio fiscal. Decirlo así, se aleja de lo que la disposición regula y por ende las afirmaciones que la sentenciadora realiza en cuanto a la propiedad de las obras son erradas.

10º) Que así las cosas en virtud de lo tratado y razonado en los motivos 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente sentencia se acogerá la causal de nulidad impetrada por el Serviu y en su lugar se dictará una sentencia de reemplazo, dando una correcta aplicación del artículo 183 A del Código del Trabajo, que exima al SERVIU de cualquier responsabilidad en régimen de subcontratación, por no empecerle.



Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 477, 478 c), 480, 481 y 482 del Código del Trabajo, se declara;

I.- Que, **se rechaza** el recurso de nulidad interpuesto por la demandada **Municipalidad de Codegua**, fundado en la causal de invalidación sustentada en el artículo 478, letra c) del Código del Trabajo y se rechaza, además, tal arbitrio, fundado en la causal de infracción de ley del artículo 477 del Código del Ramo, fundado en dos aspectos que el arbitrio refiere.

II.- Que, por el contrario, **se acoge** el arbitrio de invalidación interpuesto por la demandada Serviu, sustentada en la causal de invalidación en el artículo 477 del Código del Trabajo, sobre infracción de ley, en contra de la sentencia definitiva de fecha 5 de diciembre de 2023 y su complementación de 18 de enero del año en curso, en los autos caratulados Padilla con Construcciones y Multiservicios Pasyva Limitada, RIT 651-2021 del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, y, por lo tanto, **se anula** la sentencia definitiva antes individualizada, **sólo en cuanto** acogió la demanda en contra del Serviu y la condenó solidariamente al pago de las prestaciones que se detallan, procediéndose a dictar a continuación, sin nueva vista, pero separadamente, la correspondiente sentencia de reemplazo.

Acordado lo anterior con el voto en contra del abogado integrante Sr. Marco Arellano Quiroz, quien no obstante compartir el fallo en lo central, discrepa de lo señalado en el considerando 3º) ya que, a su juicio, el problema del recurso más que omitir la norma infringida, es que discute a quién entiende actuando sujeto a régimen de subcontratación y ese asunto queda resuelto en la presente sentencia, siendo innecesario abordarlo nueva y separadamente. Asimismo, no comparte el considerando 4º) de la sentencia que antecede, en tanto entiende que la nulidad del despido no es aplicable a las entidades públicas, puesto que la etiología de la norma es la protección del trabajador frente al



empleador que voluntaria y conscientemente no paga las cotizaciones previsionales, para asegurar al trabajador el debido resguardo de los derechos previsionales que nacen del pago de esos estipendios. En ese sentido, respecto de los entes público, ya sea por aplicación de las normas laborales directamente o por vía de subcontratación, el trabajador tiene asegurado el pago de sus imposiciones o el cumplimiento del fallo que se dicte en su favor -tal como sucede en el caso de marras- sin que exista la necesidad de compeler al empleador (entidad pública) a cumplir, por la vía de la constitución de una indemnización anticipada como sucede con los empleadores particulares.

Junto a ello, se adiciona el hecho que el no pago de las imposiciones en las entidades públicas debe estar respaldado por una decisión fundada en un acto administrativo que goza de presunción de legalidad -tal sucede en el caso citado vía unificación, en que el origen del no pago es el contrato de honorarios, aprobado obviamente por un acto administrativo- y materialmente, además, cuando se viene a discutir el asunto han pasado meses sin el pago de las imposiciones, por lo que, el ente público jamás podrá convalidar el despido pagando las cotizaciones previsionales respectivas, porque siempre se incluirán meses no trabajados, respecto de los cuales no tiene acceso patrimonial para efectuar el pago por vulnerar el principio de legalidad del gasto.

En esa medida, someter a los entes públicos a este régimen, implica crear -per iurisprudentiam- una indemnización automática y sin causa, a la que el demandado (ente público) no puede oponerse, asunto que va más allá del tenor lógico de lo que el artículo 162 de la ley laboral podría buscar.

Redacción del Fiscal Judicial Sr. Joaquín Ignacio Nilo Valdebenito y el voto en contra, su autor.

Regístrese, comuníquese y archívese.





Rol Corte 81-2024 Laboral.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MQBPXPKBNQR

Pronunciada por la **Segunda Sala** de esta Iltma. Corte, integrada por el ministro Sr. Pedro Caro Romero, el Fiscal Judicial Sr. Joaquín Nilo Valdebenito y el abogado integrante Sr. Marco Arellano Quiroz.

<div></div> <div>Pedro Salvador Jesús Caro Romero Ministro Corte de Apelaciones Treinta de agosto de dos mil veinticuatro 19:03 UTC-4</div> <div></div>	<div></div> <div>Joaquín Ignacio Nilo Valdebenito Fiscal Corte de Apelaciones Treinta de agosto de dos mil veinticuatro 16:22 UTC-4</div> <div></div>
<div></div> <div>Marco Antonio Arellano Quiroz Abogado Corte de Apelaciones Treinta de agosto de dos mil veinticuatro 15:46 UTC-4</div> <div></div>	



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MQBPXPKBNQR

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministro Pedro Salvador Jesus Caro R., Fiscal Judicial Joaquin Ignacio Nilo V. y Abogado Integrante Marco Antonio Arellano Q. Rancagua, treinta de agosto de dos mil veinticuatro.

En Rancagua, a treinta de agosto de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MQBPXPKBNQR

Rancagua, treinta de agosto de dos mil veinticuatro.

En cumplimiento a lo precedentemente resuelto y a lo dispuesto en el artículo 478 del Código del Trabajo, se dicta el siguiente fallo de reemplazo.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia anulada de 5 de diciembre de 2023 y su complementación, de 18 de enero del año en curso, con excepción de los párrafos primero, tercero y quinto del considerando décimo tercero, los que se eliminan y se suprime, además, el motivo décimo cuarto.

Y SE TIENE, ADEMÁS, PRESENTE:

1.- Que, de acuerdo con lo señalado en los considerandos segundo, tercero, y cuarto de la sentencia de nulidad que precede, corresponde mantener la decisión de acoger la demanda sobre despido injustificado y nulidad, más los cobros de prestaciones promovida por el actor Manuel Jesús Padilla Osses, en contra de su ex -empleador “Construcciones y Multiservicios Pasyva Ltda.” y en contra de la Ilustre Municipalidad de Codegua, como también la condena solidaria impuesta a estos demandados para el pago de las prestaciones que se detallan en los numerales 1 a 10, del fallo que se revisa, por cuanto el recurso de nulidad deducido por la Ilustre Municipalidad de Codegua fue desestimado.

2.- Que, en cambio, corresponde rechazar la demanda deducida en contra del Serviu, conforme a los argumentos vertidos en los motivos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno del fallo de nulidad por cuanto no se configura a su respecto el régimen de subcontratación en que se sustenta la demanda.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 456, 459 y 482 del Código del Trabajo, **se declara:**

I.- Que, **SE MANTIENE** la decisión de acoger la demanda promovida por **MANUEL JESÚS PADILLA OSSES** en contra de su ex empleador **CONSTRUCCIONES Y**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DLQLXPBNQR

MULTISERVICIOS PASYVA LTDA., representada legalmente por VERÓNICA VILLAR REYES, y en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CODEGUA, representada por su alcalde JOSÉ ALEXANDER FLORES OSORIO, todos ya individualizados, en cuanto se declaró que el despido del actor es injustificado y nulo, y que condena a tales demandados a pagar al demandante, de manera solidaria, las prestaciones mencionadas en los números 1 al 10 de la sentencia invalidada y su complementación.

II.- Que, SE RECHAZA la demanda promovida por MANUEL JESÚS PADILLA OSSES, ya individualizado, en contra del SERVIU de esta región, por no configurarse a su respecto el régimen de subcontratación.







III.- Que, SE MANTIENEN las demás declaraciones del fallo que se anula, por no estar afectadas por la sentencia de nulidad que antecede.

Regístrese y comuníquese.

Redactada por el Fiscal Judicial Joaquín Ignacio Nilo Valdebenito.

Rol Corte 81-2024 Laboral.

Pronunciada por la **Segunda Sala** de esta Iltma. Corte, integrada por el ministro Sr. Pedro Caro Romero, el Fiscal Judicial Sr. Joaquín Nilo Valdebenito y el abogado integrante Sr. Marco Arellano Quiroz.

<div></div> <div><div>Pedro Salvador Jesús Caro Romero Ministro Corte de Apelaciones Treinta de agosto de dos mil veinticuatro 19:03 UTC-4</div><div></div></div>	<div></div> <div><div>Joaquín Ignacio Nilo Valdebenito Fiscal Corte de Apelaciones Treinta de agosto de dos mil veinticuatro 16:22 UTC-4</div><div></div></div>
<div></div> <div><div>Marco Antonio Arellano Quiroz Abogado Corte de Apelaciones Treinta de agosto de dos mil veinticuatro 15:46 UTC-4</div><div></div></div>	



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DLQLXPBNQR

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministro Pedro Salvador Jesus Caro R., Fiscal Judicial Joaquin Ignacio Nilo V. y Abogado Integrante Marco Antonio Arellano Q. Rancagua, treinta de agosto de dos mil veinticuatro.

En Rancagua, a treinta de agosto de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

